

CAZADORES DE PRESAS MAYORES EN ACTIVOS

Por Robert Farzad Fotografías de Jeffrey Salter

Es época de auge para los expertos que recuperan las ganancias malhabidas de los esquemas piramidales Ponzi y otros fraudes.

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA
Aquí en Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana, la opulencia a nivel mundial y la pobreza extrema son vecinos. Niños descalzos se arremolinan entre casuchas que puntean los cerros del interior, mientras que en la costa, los americanos disfrutan de langosta a la termidor y lechosa acaramelada en centros turísticos de lujo.

Miami está a sólo 90 minutos de vuelo y Nueva York a un poco más de tres horas. Su proximidad a los Estados Unidos ha sido conveniente para Michael Díaz Jr., un abogado de Miami cuyo equipo de investigadores ha estado haciendo viajes frecuentes a la antigua colonia española de esclavos establecida hace 517 años. Díaz representa a inversionistas de los Estados Unidos que dicen haber sido estafados en \$170 millones mediante un fraude piramidal estilo Ponzi. Alegan los demandantes que un par de urbanizadores canadienses, Frederick C. Elliott y su hijo, Derek, utilizaron su dinero para pagarles a inversionistas anteriores en un complejo turístico en Puerto Plata y para costearse las grandes compras y sus proyectos vanidosos. Los inversionistas están demandando para tener acceso a los activos de los Elliott. Mientras tanto, la Comisión de la Bolsa de Valores investiga los negocios de los Elliott, de acuerdo con las personas familiarizadas con el asunto, aunque no se han presentado cargos penales. Los Elliott rehusaron hacer comentarios.

Este caso es uno de muchas explosiones financieras recientes, desde Bernard Madoff a Allen Stanford, que impulsan el negocio turbio de la "pérdida de activos". Algo básico durante gran parte de la lucha contra las drogas – y antes de eso, la caza de los traficantes de alcohol durante la era de la prohibición – sencillamente, la extinción de dominio es un proceso para recuperar el producto del delito (dinero en efectivo, viviendas, botes, y demás) de los estafadores y repartirlo entre sus víctimas.

La extinción de dominio de activos es una acción civil. Efectivamente, los Demandantes interponen demanda por partes de la propiedad, obligando a los propietarios a explicar cómo la pagaron. Si los demandados no logran dar respuestas satisfactorias, el juez puede emitir el auto de confiscación de sus activos. Con frecuencia, los abogados interponen demandas de


activos antes de que los fiscales presenten cargos penales – la mejor forma de sorprender a los estafadores. Wayne B. Black, un veterano del equipo de trabajo de la DEA, quien ahora encabeza una compañía de investigación financiera y bursátil en Miami, lo denomina el negocio "privado de cumplimiento de la ley".

Esta es una buena época para los cazadores de activos. Informes de esquemas Ponzi y otras estafas en inversiones se triplicaron durante el año pasado. Si bien no hay estadísticas confiables para rastrear el tamaño de la industria, Black dice que su compañía ha visto que la demanda se ha duplicado en lo que va del año.

El aumento de actividad ha atraído a muchos ex agentes del FBI, de la DEA y de Aduanas; abogados defensores; e investigadores privados a unir sus fuerzas – muchos usando destrezas adquiridas décadas atrás en la cúspide de la lucha contra las drogas. Díaz es un típico especialista en activos, que obtuvo sus credenciales en las calles difíciles del Miami de la década de los 80. "No hay gran diferencia entre los dos mundos", dice Michael R. McDonald, un ex agente del Servicio de Rentas Internas quien hace 30 años dirigió la Operación Greenback, un esfuerzo interinstitucional para detener los juegos financieros de los principales narcotraficantes. "Al igual que con los narcotraficantes, el objeto de la extinción de dominio es darle el golpe a los criminales donde les duele – en el bolsillo".



Derek Elliott (arriba) y su padre, Frederick, promueven los puros Artisan en su complejo turístico

A man with dark hair, wearing a dark suit jacket over a white shirt, stands in a marina. He is looking upwards and to the right. In his right hand, he holds a pair of sunglasses. The background shows several yachts docked at a pier under a clear blue sky with a few wispy clouds. The water is a deep blue.

Díaz, abogado reconocido,
conoce el juego: Protege,
y así mismo, también
persigue el botín
financiero

Sin embargo, ayudar a las víctimas del delito es sólo parte del negocio. La mayoría de los profesionales también atienden a otro grupo de clientes: los pillos. Los estafadores financieros, más ricos y sofisticados que el delincuente común, frecuentemente contratan a los mejores abogados para evitar la pérdida de los activos. Para los criminales más astutos, "hay una probabilidad de 99,9% que sus ganancias malhabidas no les serán confiscadas", dice Charles A. Intriago, un ex fiscal federal en Miami, quien se enfrentó a los narcotraficantes y lavadores de activos y ahora dirige AssetForfeitureWatch, una compañía de consultores para las agencias del orden público. Habiendo dicho todo esto, Intriago calcula que los criminales en los Estados Unidos se embolsan más de \$500 mil millones anuales.

De eso, solamente se recuperan unos \$4 mil millones, dice él – principalmente de narcotraficantes. La protección de los otros \$496 mil millones es un gran negocio. Los cazadores de activos y los mercenarios legales intercambiaron secretos durante la Primera Conferencia Global de Confiscación de Activos en abril en el Westin Diplomat Resort en Hollywood, Florida. La semblanza de Madoff fue usada como el logotipo extraoficial del evento, adornando las presentaciones de PowerPoint y el material a repartir.

Los participantes estuvieron en sesiones con títulos tales como: "No quiere decir nada si no les quitas sus bienes caros y ostentosos: una introducción a la extinción de dominio y las reglas legales del juego". Durante una sesión de preguntas y respuestas surgió este consejo: "Confiscar el dinero dentro del panel de un automóvil es mucho más fácil que decomisar una casa. Piensen en su mantenimiento y sus gastos, las barreras legales, y vender en este mercado".

Lo que no se dijo fue que muchas de estas destrezas pueden ser – y frecuentemente son – aplicadas a la inversa. La reunión, aunque no intencionalmente, fue una gran oportunidad para obtener consejos respecto de cómo ayudar a los delincuentes a proteger los activos malhabidos. Mientras más trucos aprende la ofensiva, más adopta la defensa.

Al ir tras los Elliott, Michael Díaz se basa en décadas de experiencia en ambos lados del banquillo. Después de graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami en 1986, el inmigrante cubano entró a trabajar como fiscal adjunto estatal en Florida. A mediados de la década de los 80 los homicidios relacionados con la cocaína eran tantos que el presidente Ronald Reagan puso al vicepresidente George H. W. Bush en cabeza de un grupo de trabajo local. La morgue de la ciudad, llena a capacidad, tuvo que alquilarle a Burger King (BKC) camiones refrigerados para almacenar los cadáveres. Díaz prosperó en el entorno armado de ese entonces, antes de renunciar en 1990 para integrarse a un bufete jurídico especializado en casos internacionales de lavado de activos.

Ahora dirige el bufete Díaz Reus & Targ, que cuenta con 50 abogados y consultores que en su conjunto hablan ocho idiomas. Últimamente, el caso Elliott ha consumido la mayor parte del tiempo de Díaz. La supuesta estafa data de la década de los 80, cuando los Elliott comenzaron a comprar terrenos frente al mar en Puerto Plata. Para el 2000 habían reubicado sus operaciones

comerciales a la isla y comprado varias parcelas de primera.

Hacienda Resorts, el operador de un hotel cercano, le planteó a los Elliott una propuesta de construir un complejo turístico en sus terrenos. En 2001, los Elliott llegaron a un acuerdo para construir el Sun Village Resort & Spa, un complejo de 300 habitaciones que ofrecía villas lujosas, cinco restaurantes, nueve bares, y siete piscinas.

De acuerdo con la documentación presentada en la corte, durante los próximos tres años el equipo de padre e hijo captaron \$32 millones de por lo menos 1.600 inversionistas privados. Un folleto de 2001 proyectaba un retorno total de 60% en el lapso de tres años y aseguraba a los inversionistas que "su inversión está tan segura como el terreno en el cual se construye, y recibirán sus ingresos en el trimestre calendario, cada 90 días."

Pero, tres años más tarde, Sun Village todavía estaba bajo construcción – y quemando dinero. Los Elliott necesitaban más capital. Afortunadamente para ellos, los bienes raíces pasaban por una época de mucho auge a nivel mundial. Inversionistas de todo el mundo estaban deseosos de esa rara mezcla de plusvalía en el mercado y rendimientos tipo bonos, y los Elliott diseñaron una propuesta que incluía ambas cosas. Ofrecían la oportunidad de comprar intereses de temporada en suites de lujo, parecido a un esquema de tiempo compartido, con períodos alquilados en incrementos de una semana. Pero había un incentivo dulce: toda semana que no fuera usada se entregaría a agentes de viaje, quienes encontrarían inquilinos. El producto entonces se devolvería a los inversionistas en pagos trimestrales establecidos con anterioridad.

Los Elliott tomaron \$64 millones del nuevo plan y continuaron agregando amenidades a Sun Village, incluyendo un spa y un teatro al aire libre. Pero el complejo, aún sin terminar, arrojaba pérdidas anuales de más de \$1 millón. Los Elliott se pagaban honorarios por administración y presuntamente comenzaron a usar el dinero de los nuevos inversionistas para pagarles a los anteriores. Y, seguían lanzando proyectos y esquemas para captar fondos, primero ofreciendo intereses en bungalows adyacentes con la marca conjunta de la revista Maxim (posteriormente, Maxim interpuso demanda para retirarse), luego, restaurando un complejo hotelero abandonado en la playa de Juan Dolio en la isla.

Para la primavera de 2008, a pesar de haber captado \$170 millones para los tres proyectos, los Elliott no han terminado ninguno. Dejaron de hacer los pagos trimestrales a los inversionistas – y comenzaron a enviar señales de que las demandas de los inversionistas no prosperarían. "Tenemos una estructura compleja, diseñada para aislar estas propiedades de reclamos y demandas judiciales", escribió Derek Elliot en un correo electrónico al personal. "Estas compañías están completamente a prueba de decisiones judiciales". No era una advertencia vacía. Los Elliott habían estructurado su compañía de manera que algunos activos podían ser perseguidos únicamente en las cortes de Delaware; otros en San Vicente, las Granadinas, o Gibraltar; otros en la República Dominicana o en Turcos y Caicos; y la mayoría en una combinación de las mismas. "Estos son indicios patentes de fraudes financieros en ultramar," dice el socio de

Díaz, Robert I. Targ, un veterano del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos.

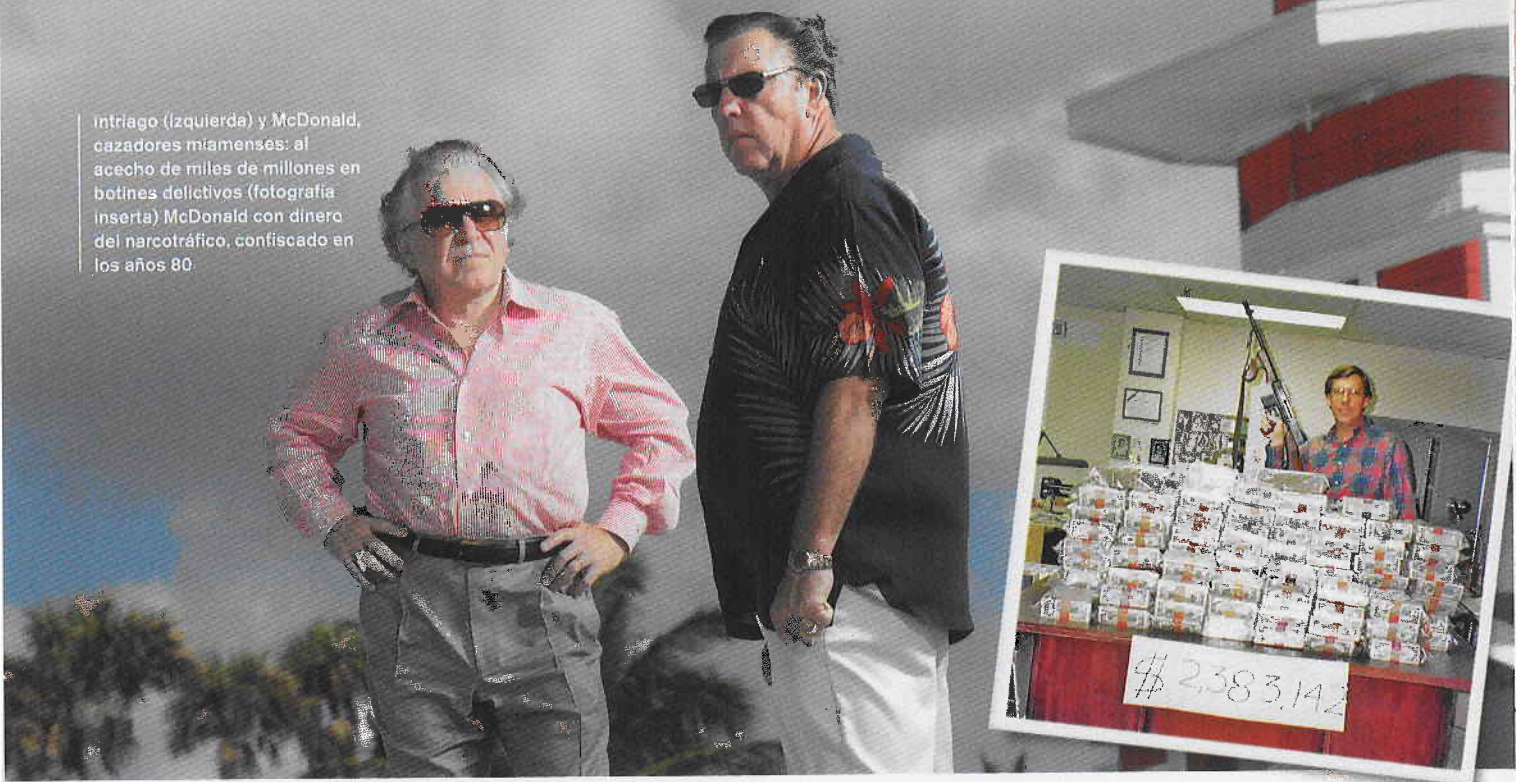
Díaz conoce los esquemas complicados de financiamiento. Ha dedicado miles de horas a la defensa de administradores de dinero y otros financistas de la extinción de dominio. En 2006

LA DEMANDA ALEGA QUE LOS ELLIOTT DESVIARON FONDOS DE LOS

INVERSIONISTAS PARA COMPRAR UN AVIÓN PARTICULAR, UN YATE Y

UN AUTOBÚS PARA GIRAS DE MÚSICA COUNTRY, ENTRE OTROS

Intriago (izquierda) y McDonald, cazadores miamenses: al acecho de miles de millones en botines delictivos (fotografía inserta) McDonald con dinero del narcotráfico, confiscado en los años 80.



ganó un caso de un supuesto artista argentino de un esquema Ponzi quien fue demandado por mil millones de dólares. El 3 de marzo, Díaz interpuso demanda en el Juzgado de Distrito de Estados Unidos en Miami, la jurisdicción estadounidense más cercana al Caribe. La demanda alega que los Elliott usaron su compañía como “alcancía personal”, distrayendo las ganancias de los inversionistas hacia compañías tenedoras personales, “fraudulentamente desviando fondos” para financiar Artisan, una marca de puros de lujo, y para pagar un avión particular, un yate de \$520,000, un festival de cine, un autobús de \$300,000 para giras de música country, tierras y otros artículos.

Pero, probar que un demandado ha usado las ganancias de los inversionistas para comprar un juguete en particular no es fácil. ¿Quién puede decir que los Elliott no perdieron dinero junto con todos los otros? ¿Que ellos no compraron efectos personales con ahorros legítimos? ¿Que el verdadero culpable de las pérdidas no fue el colapso global de los bienes raíces?

El equipo legal de los Elliott, codirigido por Nelson C. Bellido, abogado de Coral Gables (Florida), un ex fiscal, ha estado contragolpeando vigorosamente. Bellido ha interpuesto dos escritos intentando descalificar a Díaz, alegando que Díaz, ilegalmente, buscaba nuevos clientes entre los cientos de inversionistas que quedan por unirse a la demanda. (Un juez de instrucción considera esta pretensión).

A pesar de los escollos, en marzo, Díaz logró una victoria cuando atrajo a Greg Clark a su lado. Hasta el verano pasado, Clark, de 48 años, había sido el director financiero del Grupo Elliott. Díaz dice que le expuso todo claramente: “Puede contar su historia ahora o sentarse y correr el albur” en otras acciones civiles y penales. Durante las siguientes 48 horas, dice Díaz, logró que el ejecutivo cambiara de parecer.

Clark razonó que podía proteger mejor sus activos – y obtener un trato favorable en procesos penales – detallándoles el fraude a los demandantes. “Parecía que se había quitado el peso del mundo de los hombros”, dice Díaz. Clark rehusó comentar.

Díaz dice que Clark hizo un diagrama de los negocios de los Elliott, mostrando cómo se les pagaba a los primeros inversionistas con dinero de los segundos – y respaldó sus alegatos con registros financieros. “En vez de utilizar los fondos obtenidos de la forma en que fueron presentados a los compradores”, Clark aseveró en su declaración jurada del 20 de marzo, “el Grupo Elliott se pagó grandes honorarios y desvió fondos para adquirir activos personales”.

En una declaración jurada del 8 de mayo, Díaz citó el testimonio de Clark al preguntarle a Frederick Elliott sobre \$17 millones desviados del proyecto incompleto de Juan Dolio hacia una empresa de bienes raíces no relacionada. Frederick cedió. Dijo no poder justificar las discrepancias entre el dinero recibido y el dinero utilizado.

La admisión fue un momento decisivo en el caso. Al 19 de mayo, jueces, tanto en Miami como en la República Dominicana, habían congelado \$36 millones de los activos de los Elliott en Estados Unidos y la República Dominicana. Nueve días más tarde los demandantes obtuvieron una orden judicial de congelar \$68 millones adicionales en activos, incluyendo el yate de 54 pies de los Elliott, el Independence. Los Elliott han dado señales de que impugnarán las órdenes.

“Los alegatos de delitos de los demandantes son absolutamente falsos”, dijo Carlos F. Concepción, uno de los abogados principales de Bellido en el caso, en un correo electrónico a BusinessWeek. “Los Elliott continuarán luchando arduamente en la República Dominicana para proteger los intereses de los inversionistas contra el grupo de disidentes que, indebidamente, intenta tomar el control de las propiedades de los Elliott”.

A pesar de su progreso a la fecha, Díaz está ansioso por volver a su trabajo como defensor. Sentado en su elegante oficina de Miami, se reclina en su silla y pregunta cómo fue la conferencia reciente sobre la extinción de dominio de activos. “Bueno, suerte para esos tipos”, dice con una sonrisa maliciosa. “Son buenos para el negocio”. | BW |